



Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Distr. limitada
29 de agosto de 2012
Español
Original: inglés

Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre prevención de la corrupción

Tercer período de sesiones

Viena, 27 a 29 de agosto de 2012

Proyecto de informe

Adición

III. Aplicación de la resolución 4/3 de la Conferencia, titulada “Declaración de Marrakech sobre la prevención de la corrupción”, y de las recomendaciones formuladas por el Grupo de trabajo en su reunión de agosto de 2011

A. Buenas prácticas e iniciativas en la prevención de la corrupción

ii) Debate temático sobre la aplicación del artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, incluido el uso de las alianzas entre el sector público y el sector privado

1. El Grupo de trabajo comenzó su debate de fondo sobre la aplicación del artículo 12 de la Convención con la presentación, por parte de la Secretaría, de la nota de antecedentes titulada “Aplicación del artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, incluido el uso de las alianzas entre el sector público y el sector privado” (CAC/COSP/WG.4/2012/2). La Secretaría presentó también una reseña general de las iniciativas y prácticas comunicadas por los Estados Miembros y las organizaciones acerca de la prevención de la corrupción involucrando con tal fin al sector privado. Se puso de relieve que los aspectos más corrientemente notificados guardaban relación con normas de contabilidad y auditoría, códigos de conducta y disposiciones similares, incluidas las que regulaban las relaciones contractuales entre organismos públicos y empresas.

2. El panelista de Malasia expuso una serie de ejemplos de prevención de la corrupción mediante la coordinación entre las partes interesadas de los sectores público y privado, sobre la base de los Principios anticorrupción aplicables a las empresas, establecidos mediante una serie de mesas redondas entre organismos



gubernamentales y el sector privado. Dichos principios se habían aplicado a través de mecanismos como la Promesa de integridad empresarial, en cuya virtud una sociedad se comprometía a crear un entorno empresarial exento de corrupción y adherirse a los principios anticorrupción, y el Pacto de integridad, que imponía a los participantes en licitaciones el deber de declarar que se abstendrán de prácticas corruptas a lo largo de todo el proceso de contratación pública para poder participar en tales procesos. El mecanismo Supervisión de megaproyectos se puso en práctica en 2012 como medio para garantizar que todos los proyectos nacionales cuyo valor excediera de 160 millones de dólares de los Estados Unidos y fueran de interés público sean supervisados por un Comité de integridad y gobernanza que asegure el cumplimiento de los requisitos y promueva la integridad.

3. El panelista del Brasil expuso en su declaración las experiencias de la Contraloría General de su país para fomentar la integridad en el sector privado por medio de una alianza con el Instituto Ethos. Desde 2006 el Brasil había emprendido una serie de iniciativas de integridad empresarial, como la de los compromisos voluntarios que las sociedades podían asumir en virtud de un Pacto empresarial. La Campaña de transparencia servía para supervisar el cumplimiento de dicho pacto y preveía la exclusión y suspensión de las sociedades que no lo cumplieran. El orador se refirió especialmente a la Lista Pro-Ética, iniciada en 2010, que servía para establecer “listas transparentes” de las empresas que invertían fondos en medidas de ética e integridad. El proceso de selección previsto para dicha Lista era muy exhaustivo y solo diez de las 70 empresas que lo habían solicitado habían sido inscritas en ella.

4. A continuación el panelista de la Federación de Rusia expuso las iniciativas del país para fomentar el diálogo, fin con el que se creó en 2011 un grupo de trabajo encargado de combatir la corrupción e integrado por representantes de las asociaciones empresariales, los sindicatos y las autoridades nacionales, bajo la dirección del Ministerio de Desarrollo Económico. El grupo había adoptado una Carta anticorrupción de la comunidad empresarial, que incluía normas destinadas a las asociaciones de dicho sector así como una hoja de ruta para su aplicación, e involucraba a la comunidad empresarial en el debate de los proyectos de ley pertinentes. Otra iniciativa que expuso el panelista se refería a un examen a fondo de las formas adecuadas de regular la promoción de intereses particulares en la Federación de Rusia. Dicha iniciativa comprendió, entre otras cosas, una reunión técnica internacional, celebrada en Moscú en junio de 2012, con la participación de organizaciones internacionales como la UNODC y la OCDE, así como de expertos internacionales.

5. Varios oradores valoraron positivamente la labor realizada por la UNODC y la documentación informativa presentada. Algunos oradores hicieron exposiciones generales de las iniciativas emprendidas en sus países para establecer políticas y prácticas de prevención de la corrupción que involucren al sector privado.

6. Un orador destacó la importancia de crear conductos de comunicación abiertos, incluso por medios alternativos, además de los procedimientos más formalistas de alianza del sector público y el privado, por ejemplo pactos de integridad y códigos de ética. Destacó que las autoridades gubernamentales deberían comunicarse de manera proactiva acerca de sus expectativas con la comunidad empresarial antes de exigir el cumplimiento de requisitos. Varios oradores notificaron que en sus países había sitios web y boletines de información al sector

privado sobre las buenas prácticas y leyes y reglamentos de interés, así como servicios de asesoramiento caso por caso, previa solicitud.

7. Algunos oradores hicieron hincapié en la importancia de un mayor acercamiento entre los sectores público y privado a fin de intensificar el diálogo y el entendimiento en la prevención de la corrupción. Muchos informaron que recurrían a mesas redondas para intercambiar experiencias, analizar el cumplimiento de la Convención y definir los ámbitos en que era preciso realizar mejoras. Varios oradores señalaron que habían invitado al sector privado a participar en la formulación de estrategias y planes de trabajo conjuntos contra la corrupción con la cooperación de múltiples interesados. Un orador destacó que se había invitado al sector privado a que opinara sobre el desempeño de los ministerios gubernamentales en lo tocante a la prevención de la corrupción.

8. Varios oradores reconocieron las diferencias que existían en la comprobación de cuentas en los sectores público y privado, aunque señalaron que se trabajaba para armonizar las normas y definir un enfoque común en materia de integridad y ética. Varios Estados subrayaron que los requisitos relativos a la contabilidad y la comprobación de cuentas tanto en el sector público como en el privado deberían ajustarse a las normas internacionales. Un orador hizo hincapié en que la contabilidad debía ser auténtica, veraz e integral para que diera una imagen completa de la situación financiera de una empresa. Varios oradores pusieron de relieve la importancia de armonizar los requisitos relativos al mantenimiento de registros financieros con las normas sobre prescripción aplicables a los delitos de corrupción.

9. Varios oradores hicieron referencia a la promoción de códigos de conducta y de ética para el sector privado. Sin embargo, varios oradores señalaron que era difícil calibrar el cumplimiento real de dichos códigos. Se hizo especial hincapié en la importancia de los códigos de conducta en sectores de gran notoriedad y alto riesgo, como las industrias de extracción, el sector de la salud y la construcción.

10. Varios oradores pusieron de relieve las dificultades que plantea la supervisión y regulación del sector privado, en particular en relación con los contratos entre entidades del sector privado. Otro orador se refirió al hecho de que muchos países tenían economías con sectores no estructurados muy importantes que no estaban regulados y eran vulnerables a la corrupción.

11. El observador de la Academia Internacional contra la Corrupción informó del establecimiento de un programa académico de maestría en estudios contra la corrupción, que incluía a conferenciantes y estudiantes que participaban activamente en la lucha contra la corrupción en los sectores público y privado.

B. Informe sobre la situación de la aplicación de la resolución 4/3 de la Conferencia y otras recomendaciones

12. Una representante de la Secretaría presentó información actualizada al Grupo de trabajo sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución 4/3, titulada “Declaración de Marrakech sobre la prevención de la corrupción” desde la celebración del último período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que tuvo lugar en

Marrakech del 24 al 28 de octubre de 2011. La oradora expresó la esperanza de que el Grupo de trabajo siguiera ayudando a la Conferencia a definir el camino que debería seguirse para una actuación eficaz en la prevención de la corrupción. Recordó la necesidad de informar al Secretario General de la designación de las autoridades competentes que pudieran prestar asistencia a otros Estados parte en la elaboración y aplicación de medidas específicas para prevenir la corrupción, así como de actualizar esa información cuando fuera necesario. Informó al Grupo acerca de una iniciativa titulada “La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como marco para incorporar salvaguardias de lucha contra la corrupción a la organización de grandes eventos públicos”, destinada a definir buenas prácticas, sobre la base de la Convención, para prevenir la corrupción relacionada con tales eventos. También proporcionó al Grupo información actualizada sobre la aplicación de la Iniciativa de Integridad Institucional de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación, destinada a ajustar las normas internas de ética e integridad de sus miembros a los principios de la Convención. Además, la representante de la Secretaría esbozó un proyecto destinado a elaborar materiales prácticos para prestar asistencia a los Estados parte en el establecimiento de medidas para que los periodistas puedan actuar de manera responsable y profesional en su cobertura de la corrupción, incluso mediante el intercambio de buenas prácticas, experiencias actuales y ejemplos de casos pertinentes. En lo tocante a la cooperación entre las partes interesadas y los distintos sectores de la sociedad para prevenir la corrupción, la representante de la Secretaría destacó que la UNODC había puesto en marcha una nueva iniciativa, titulada Oferta pública inicial sobre la integridad, la cual ofrecía a las empresas la oportunidad de ayudar a los países en desarrollo a enfrentar el problema de la corrupción y fortalecer su capacidad para combatirla. Por último subrayó que la UNODC desempeñaba una función de primer orden en la Iniciativa Académica sobre la Lucha contra la Corrupción (ACAD), un proyecto de colaboración académica orientado a elaborar un amplio plan de estudios sobre la lucha contra la corrupción, consistente en un conjunto de módulos de aprendizaje individuales, programas de enseñanza, estudios monográficos, instrumentos educativos y obras de consulta, que las universidades y otras instituciones académicas podrían integrar en sus actuales programas educativos.

13. Los oradores acogieron con beneplácito el informe presentado por la Secretaría sobre los progresos realizados en la aplicación de la Declaración de Marrakech. Se solicitó que la Secretaría siguiera ofreciendo información actualizada sobre esta cuestión. Se insistió en la importancia de que los Estados parte aplicaran la resolución 4/3. Con respecto a la designación de autoridades competentes que asistieran a los Estados parte en la elaboración y aplicación de medidas específicas para prevenir la corrupción conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Convención, Argelia señaló que en breve presentaría información sobre su autoridad competente.

14. Se hizo hincapié en la importancia de que los Estados parte realizaran evaluaciones nacionales de su aplicación del Capítulo II, aunque ese Capítulo no se estuviera examinando en ese momento. Además, se propuso que la Secretaría, en calidad de observatorio internacional de prevención de la corrupción, siguiera recopilando, sistematizando y difundiendo buenas prácticas y modelos relativos a la aplicación del Capítulo II, incluso en lo que respecta a la contratación pública y la función del sector privado, así como en el contexto de las reuniones y los grupos de

trabajo del Grupo de los Veinte (G20) y el Grupo “Business-20” (B20), entre otras cosas. También se propuso que la Secretaría, en el contexto de la preparación del examen del Capítulo II de la Convención y teniendo en cuenta su función en cuanto a la preparación de buenas prácticas para la aplicación de esta, preparase una matriz exhaustiva de las medidas de prevención adoptadas por los Estados parte, que incluyera los sitios web pertinentes y los datos de contacto de las autoridades encargadas de la lucha contra la corrupción y los expertos nacionales en la materia.

15. Los oradores subrayaron la importancia de ofrecer asistencia técnica a los países que la solicitaran para contribuir a que se hiciera una mayor aplicación de los artículos del Capítulo II de la Convención, en particular los artículos 9 y 12. Se sugirió que en África había una demanda considerable de programas multifacéticos de lucha contra la corrupción y que estos deberían adaptarse al contexto y las necesidades específicas de cada país, sin ser preceptivos. Esta asistencia podría facilitarse en colaboración con el Comité contra la Corrupción de la Unión Africana, que había estudiado diversas iniciativas de prevención de la corrupción. Desde el punto de vista de la programación, se propuso que se emprendieran nuevas iniciativas mundiales y regionales de lucha contra la corrupción, en particular en el ámbito de la recuperación de activos. Tales iniciativas podrían formularse en coordinación con otras instituciones, entre ellas el Banco Mundial, la Iniciativa para la recuperación de activos robados (Iniciativa StAR), la OSCE, la OCDE y otros departamentos y organismos de las Naciones Unidas.

16. También se propuso que se prestara más atención a la prevención de la corrupción en el sector privado en lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos y los profesionales liberales como abogados, auditores, contables y consultores, además de las empresas más grandes. Se señaló la importancia de las alianzas entre el sector público y el privado para la aplicación del Capítulo II de la Convención y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se sugirió que entre esas iniciativas podrían figurar medidas de protección económica, incluso en relación con los contratos y la prevención de daños económicos, para las empresas y los negocios que denunciaran prácticas corruptas, que podrían comprender la inmunidad judicial. Se acogió con beneplácito la iniciativa de la Secretaría en materia de prevención de la corrupción en el contexto de los grandes eventos públicos.

17. Se hizo hincapié en la importancia de aplicar programas educativos para la prevención de la corrupción, en particular a nivel universitario, y los oradores acogieron con beneplácito la Iniciativa Académica sobre la Lucha contra la Corrupción (ACAD) de la Secretaría y alentaron a que se realizaran más actividades en este ámbito, así como actividades para promover programas en otros niveles de enseñanza, como las escuelas primarias y secundarias. Además, se propuso que se realizaran más actividades de capacitación y concienciación social sobre la prevención de la corrupción.

18. Se propuso que en la aplicación del Capítulo II se considerara prioritario prestar más atención a la prevención de la corrupción en el poder judicial. También se señaló la importancia de que las autoridades nacionales, entre ellas los órganos legislativos, las oficinas ejecutivas y el poder judicial, coordinaran su labor institucional en materia de prevención de la corrupción.

IV. Aprobación del informe

19. El 29 de agosto de 2012 el Grupo de trabajo aprobó el informe sobre su tercera reunión (CAC/COSP/2012/WG.4/L.1 y Add.1 y Add.2).
